

AYUDA MEMORIA: PROYECTO DE INTERVENCION LEY DE COHECHO

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo

Para: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Fecha: 23 de Octubre de 2018

Ref.: Proyecto de Intervención Cohecho.

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, pongo a su consideración un proyecto de intervención de la materia de la referencia,

PROYECTO DE INTERVENCION

El proyecto de ley que modifica el Código Penal, en materia de delitos de cohecho y soborno, aumenta las penas y crea nuevas figuras delictivas para perseguir y sancionar este tipo de conductas, se enmarca dentro de una política de Estado que, durante la última década, ha caminado por la senda de los compromisos asumidos por nuestro país, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por este Congreso Nacional en el año 2006.

En el preámbulo de la citada Convención, se consigna que uno de sus principales objetivos es el defender a las instituciones, la democracia, la ética y la justicia, de las amenazas planteadas por el flagelo de la corrupción que hoy engloba acciones delictivas que trascienden las fronteras y que mutan constantemente, buscando su impunidad.

Es por ello que, el Estado de Chile, se comprometió a “promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción”, reconociendo, en todo momento, la necesidad de respetar los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales, civiles y administrativos que se lleven a cabo, así como la soberanía de cada Estado.

Bajo este marco, el proyecto de ley incorpora dentro del catálogo de penas contempladas por el artículo 21 del Código Penal inhabilidades perpetuas y

temporales para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado bajo distintas modalidades.

El Código Penal, actualmente contempla las mencionadas inhabilidades para cargos, oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares, en los términos señalados en el mismo artículo 21 del Código Penal.

Cabe preguntarse si esta generalidad, establecida por la nueva pena propuesta, que abarca al ámbito privado, es conveniente de ser incorporada como parte de una política criminal.

No obstante lo anterior, se sugiere la aprobación de este proyecto de ley.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria

Asesor Legislativo Externo

A large black rectangular box redacting the signature and any text below the name 'Asesor Legislativo Externo'.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS PARA LA DISCUSION EN PARTICULAR DEL CONTRATO POR OBRA O FAENA.

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo.

Para: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Fecha: 22 de Octubre de 2018

Ref.: Modificación del Código del Trabajo: contrato por obra o faena.

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, pongo en su consideración minuta en relación a la materia de la referencia.

MINUTA

- I. La redacción propuesta para el artículo 10 bis que se sugiere incorporar al Código del Trabajo, es la siguiente:

“Artículo 10 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 6 del artículo 10, las partes podrán celebrar un contrato por una obra o faena determinada.

El contrato por obra o faena es aquella convención por la que el trabajador se obliga con el respectivo empleador a ejecutar una obra material o intelectual específica y determinada, en su inicio y en su término, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la duración de aquella. Las diferentes tareas o etapas de una obra o faena no pueden por sí solas ser objeto de dos o más contratos de este tipo en forma sucesiva, caso en el cual se entenderá que el contrato es de plazo indefinido.

No revestirán el carácter de contratos por obra o faena aquellos que implican la realización de labores o servicios de carácter permanente y que, como tales, no cesan o concluyen conforme a su naturaleza, lo cual se determinará en cada caso específico por la Inspección del Trabajo respectiva, sin perjuicio de las facultades de los tribunales de justicia en caso de controversia.”

La redacción del nuevo artículo 10 bis, antes transcrita fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

En consecuencia, se sugiere votar por su aprobación y en caso de darse la discusión separada del mencionado artículo, se sugiere, basar el voto favorable en los siguientes argumentos:

La incorporación del contrato por obra o faena al Código del Trabajo constituye una herramienta para reducir la alta Tasa de Ocupación Informal existente en nuestro país, la cual, de conformidad al último informe Trimestral del Instituto Nacional de Estadísticas alcanza a un 28,5%.

En el caso de la Región de Arica y Parinacota la tasa de Ocupación Informal es superior en casi siete puntos porcentuales al promedio nacional, llegando a un 35,3%. Lo cual se da en un contexto en que en la presente gestión de gobierno la tasa de desocupación de la región XV (6,1%) ha logrado ser más baja que el promedio nacional (7,3%).

La coincidencia entre un porcentaje de desocupación informal y de desempleo superiores al promedio nacional se da en nueve regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá (39,3%), Coquimbo (34,8%), Maule (30,3%), Bio Bío (29,9%), Araucanía (39,3%), Los Ríos (37,4%), Los Lagos (31,4%) y Aysen (30,5%).

La incorporación, en la parte final del artículo propuesto de que sean, en caso de controversia, los tribunales de justicia, quienes decidan si se trata de un contrato de obra o faena o si se trata de contratos que implican servicios o labores de carácter permanente, garantiza que esta decisión no quede librada a la inspección del trabajo y responda, en definitiva a un desarrollo jurisprudencial que irá acogiendo las distintas modalidades de contratos por obra o faena que se presenten.

- II. La Comisión aprobó la nueva redacción del inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo, el cual quedó de la siguiente forma:

“Artículo 41. Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.

No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones

familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnizaciones establecidas en el artículo 163 y las demás que proceda pagar al extinguirse la relación contractual ni, en general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo.

Esta modificación fue aprobada por tres votos a favor, no consignándose votos ni a favor ni en contra ni del Senador Allamand, ni del Senador Durana.

Se sugiere la aprobación de este artículo en consideración a que permite la exclusión del concepto "remuneración" de todas las indemnizaciones, no dejando espacio para interpretaciones en orden a incorporar en la "remuneración" algún tipo de indemnizaciones que no sean por años de servicio. Es por ello que se sugiere votar a favor-

- III. La tercera modificación propuesta incorpora en el artículo 67 un nuevo inciso segundo, con el siguiente tenor:

"Igual derecho asistirá al trabajador que prestare servicios continuos al mismo empleador en virtud de dos o más contratos celebrados por obra o faena determinada y que sobrepasen el año. Con todo, y sólo para estos efectos, el trabajador podrá optar para que el pago de su feriado proporcional se difiera al momento de hacerlo efectivo en las condiciones señaladas en este inciso, debiendo dejar constancia expresa de ello en el respectivo finiquito. En caso que los contratos no sobrepasen el año y el trabajador hubiere diferido el pago de los feriados conforme lo señala este inciso, el empleador deberá pagar en el último finiquito la totalidad de los feriados adeudados."

La incorporación propuesta de un nuevo inciso segundo al artículo 67 del Código del Trabajo, la cual busca equiparar el derecho de un trabajador permanente con quien suscribe dos o más contratos de obra o faena, que en su conjunto sobrepasen el término de un año. Esta reforma fue aprobada por tres votos a favor y cero en contra (Goic, Muñoz y Letelier. No se consignan los votos de los Senadores Durana y Allamand).

Al respecto, se sugiere votar a favor toda vez que este nuevo inciso permite una adecuada operatividad para el caso del pago de feriados.

- IV. La cuarta modificación agrega un inciso cuarto al artículo 162 del Código del Trabajo, con el siguiente tenor:

"Igual indicación deberá contener la comunicación de la terminación del contrato celebrado para una obra o faena determinada, cuando corresponda el pago de indemnización por el tiempo servido, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 163."

Esta modificación, aprobada por el voto favorable de los senadores Goic, Muñoz y Letelier (No se consignan los votos de los Senadores Durana y Allamand).

Se sugiere votar en contra puesto que no debería asimilarse la forma de término de una relación laboral de carácter permanente con la forma de conclusión de un contrato de trabajo por obra o faena.

- V. La quinta modificación, incorpora en el artículo 163 un inciso tercero nuevo, con el siguiente tenor:

"Si el contrato celebrado para una obra o faena determinada, hubiere estado vigente por un mes o más, el empleador podrá ponerle término en forma justificada en tanto pague al trabajador al momento de su terminación, una indemnización equivalente a dos y medio día de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a quince días, en la forma y modalidad señalada en el artículo vigésimo tercero transitorio de este Código. Dicha indemnización será calculada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 172, siendo aplicable a ésta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la ley N°19.728. Sólo corresponderá el pago de la prestación antes señalada, si se pusiere término al contrato por la causal de término del número 5 del artículo 159. El ejercicio del derecho establecido en este inciso, por parte del trabajador, es incompatible con las acciones derivadas de la aplicación del inciso primero del artículo 168, sin perjuicio de las acciones señaladas en el artículo 485 de este Código."

Esta modificación fue votada favorablemente por cuatros de los Senadores miembros de la Comisión, entre los cuales encuentran los Senadores Allamand y Durana.

Se sugiere votar a favor dado que establece un adecuado régimen de cálculo de indemnización de los contratos por obra o faena.

- VI. La sexta modificación sustituye el número tres del artículo 169 del Código del Trabajo que ha pasado a ser número cinco, con el siguiente tenor:

"Lo dispuesto en la letra a) de este artículo, se aplicará a la indemnización que el empleador está obligado a pagar al trabajador por causa de la terminación del contrato celebrado para una obra o faena determinada, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 163."

Esta indicación fue aprobada con los votos favorables de los Senadores Goic, Muñoz y Letelier. No se consigna la votos negativos de los Senadores Durana y Allamand.

Se sugiere votar en contra, ya que se estima que la indemnización establecida para los contratos de obra o faena no puede ser equiparable a la indemnización de los contratos laborales permanentes.

- VII. Por la misma razón anterior, se sugiere votar en contra la séptima modificación propuesta en orden a incorporar en el artículo 172 del Código del Trabajo, a continuación de "artículos" la expresión: "163".

- VIII. Asimismo y por razones expuestas en el punto VI. precedente se sugiere votar en contra el intercalar en el artículo 173, a continuación de la palabra "artículos", la expresión: "163".

- IX. La novena modificación, sugiere la incorporación del siguiente artículo transitorio:

"Artículo 23.- La norma señalada en el inciso tercero del artículo 163 permanente, se aplicará de la siguiente manera:

a) En los contratos celebrados durante los primeros dieciocho meses de vigencia de dicha norma, los trabajadores tendrán derecho al pago de una indemnización equivalente a un día de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a quince días.

b) En los contratos celebrados a partir del primer día del decimonoveno mes de vigencia de dicha norma y por los siguientes doce meses, los trabajadores tendrán derecho al pago de una indemnización equivalente a uno y medio día de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a quince días.

c) En los contratos celebrados a partir del primer día del trigésimo primer mes de vigencia de dicha norma y por los siguientes seis meses, los trabajadores tendrán derecho al pago de una indemnización equivalente a dos días de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a quince días.

d) En los contratos celebrados con posterioridad al último día del tramo anterior, los trabajadores tendrán derecho al pago de la indemnización en los mismos términos que se señalan en la norma permanente.

Si el contrato por obra o faena determinada es celebrado durante alguno de los períodos señalados en las letras a), b) o c), y termina durante un período distinto, el trabajador tendrá derecho al pago de la indemnización que corresponde por los meses trabajados en cada uno de dichos períodos.

Con todo, si en los meses de inicio y término de un contrato por obra o faena se produce el cambio de tramo, conforme a los literales del inciso primero, la indemnización corresponderá en dichos meses al tramo vigente el primer día del mes de inicio y primer día del mes de término, respectivamente.”.

La mencionada modificación fue aprobada por los Senadores Goic, Muñoz, Allamand y Durana, en consecuencia, al establecer un régimen de indemnización acorde con el contrato de obra o faena, se sugiere su aprobación.

X. La décima indicación introduce un artículo 2 al proyecto de ley presentado, el cual fue aprobado por los Senadores Goic, Muñoz, Durana y Allamand, bajo el siguiente tenor:

“Artículo 2°.- Tratándose de personas que hayan efectuado cotizaciones de salud al Fondo Nacional de Salud, al menos durante cuatro meses en los últimos doce meses calendario en virtud de contratos por obra o faena determinada, mantendrán la calidad de afiliados por un período de doce meses a contar del mes al que corresponde la última cotización.

El Director del Fondo Nacional de Salud deberá emitir en un lapso no superior a sesenta días contados desde la vigencia de la presente ley, una resolución que establezca un procedimiento expedito, directo y completo que garantice el derecho a cobertura de salud, a partir del término de la relación laboral de los trabajadores contratados por obra

o faena determinada, en la forma establecida en el inciso primero de este artículo y el literal a) del artículo 135 del decreto con fuerza de ley N°1 de 2006, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes números 18.933 y 18.469.”

En consideración a que se establece un régimen de salud adecuado a los trabajadores por obra o faena, se sugiere su aprobación.

- XI. Finalmente, la aprobación de un artículo transitorio que establece que la presente normativa tiene una vacatio legis hasta el 1 de Enero de 2019, se estima adecuada y se sugiere su aprobación. El mencionado artículo transitorio fue aprobado por los Senadores Goic, Muñoz, Allamand y Durana.



**PROPUESTA DE INTERVENCION: PROYECTO DE LEY SOBRE
PREVENCION Y PROTECCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE**

De: César Quiroga Soria , Asesor legislativo externo.

A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Fecha: 6 de Noviembre de 2018

Ref: Minuta para intervención en Sala Proyecto de embarazo adolescente.
(Discusión en particular)

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, pongo a su consideración la minuta de la referencia.

EN RELACION AL PROYECTO EN GENERAL:

El proyecto de ley establece que, por embarazo adolescente, se entiende aquel que se produce antes de los 19 años de edad, ya sea en calidad de madre o padre.

La ocurrencia del embarazo adolescente, es estadísticamente superior en las regiones del Norte de Chile, donde se verifica una mayor proporción de casos que los consignados en el promedio nacional y ello, es motivado por fenómenos como la migración, las condiciones de pobreza y la ausencia de profesionales matronas que realicen políticas de prevención.

Es rescatable, en el contexto del proyecto que la problemática y complejidad que rodea al embarazo adolescente, no se conciba exclusivamente a la madre, sino que, considere al padre adolescente, que también se encuentra en una situación de vulnerabilidad y por ello, debe ser objeto de acciones y políticas de prevención, educación y protección.

El proyecto de ley no establece un tratamiento específico del que podríamos llamar como: "embarazo infantil", el cual tiene una complejidad mayor

dadas las circunstancias de especial vulnerabilidad en que se produce y por ello, debe ser especialmente regulado.

En nuestro país, en un 36,5% de los casos de mujeres menores de 15 años, de acuerdo a las estadísticas del año 2016, no se consignan datos del padre, lo que es muy superior a una media del 8,7%, considerada en todos los rangos etáreos. Esta situación hace aun más vulnerables a las niñas, menores de quince años de edad al encontrarse especialmente desprotegidas.

Es por ello que el no visibilizar en el proyecto de ley, a las menores de quince años, nos puede llevar a la desprotección a niñas que con 12 o 13 años, e incluso a partir de sus 10 años, que lógicamente, viven una realidad muy distinta de adolescentes de 17 o 18 años.

DISCUSION EN PARTICULAR

En relación al artículo 2 del proyecto:

Si bien, el **artículo 2** del proyecto de ley establece, dentro de sus principios, al de autonomía progresiva, esto se debe reflejar en un tratamiento diferenciado, para niñas menores de quince años y para el rango etáreo que va entre los 15 a 19 años.

Dentro de los postulados que se consagran en el artículo 2 del proyecto, no se considera la participación de la familia de la madre adolescente embarazada o del padre adolescente, en el cual se encuentran insertos y que dada la minoría de edad, constituyen un factor fundamental.

El denominado principio de “protección a la intimidad”, consignado en el proyecto, señala que los funcionarios o los particulares que brindan atención a los adolescentes deben actuar con pleno respeto al derecho a su intimidad, lo que debe ser complementado con la adecuada participación de su entorno familiar, sobre todo en menores de 15 años, toda vez que es precisamente en la familia donde, salvo situaciones excepcionales, se genera un entorno de

protección ante la vulnerabilidad que se encuentra una embarazada adolescente.

De la misma forma, el artículo 2 del proyecto, establece como principio, la Libertad de conciencia, religión y pensamiento, excluyéndose en este aspecto, una vez más a la familia.

Esta exclusión, se mantiene al regular el acceso a la información en relación a la vida sexual y afectiva de la madre o padre adolescente, considerándose como marco de la misma, los establecimientos educacionales y Servicios de Salud, no haciéndose mención alguna a la esencial participación de los padres o tutores en la educación de los adolescentes.

SUGERENCIA: Se sugiere el rechazo de la propuesta del artículo 2 en caso de darse la discusión y votación separada del mismo.

En relación al artículo 7 del proyecto:

El artículo 7 del proyecto de ley establece que la atención de salud sexual y reproductiva debe ser realizada según los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, se establece que para la detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual podrán consentir, las personas de edad igual o superior a los catorce años y nada se dice de las niñas entre los 10 y los 14 años de edad. En este caso, de ser posible, tampoco se considera a la familia de la o el adolescente.

SUGERENCIA: En caso de darse la discusión y votación separada del artículo 7 del proyecto se sugiere abstenerse del mismo.

En relación al artículo 10 del Proyecto de Ley:

En el **artículo 10** del proyecto de ley se establece el deber de informar al menor de edad, en caso de embarazo reincidente, dentro de las 72 horas siguientes al parto, sobre la existencia de métodos anticonceptivos que puede utilizar y sobre los riesgos de continuar con una vida sexual no protegida, durante la adolescencia.

Esto aparece contradictorio con el objetivo del proyecto, toda vez que no hay razón para esperar una situación de reincidencia.

Esta información, debe ser proporcionada por el Estado en todo momento y en todo caso, a partir del primer embarazo, sin esperar ningún tipo de reincidencia.

Asimismo, en esta política de información **NO SE CONSIDERA A LA FAMILIA.**

SUGERENCIA: En caso de darse discusión y votación separada del artículo 10 se sugiere abstenerse.

En relación al artículo 15 del Proyecto:

En el **artículo 15** se establece que los equipos "*biopsicosociales de la atención primaria de salud pública podrán trasladarse a los establecimientos de educación para realizar el control de salud integral*".

Llama la atención que esta sea una facultad potestativa de los mencionados equipos y no se establezca, como una obligación de desarrollar estas acciones, de forma programada, a todos los establecimientos de educación, en coordinación de los mismos y con información a las familias de los adolescentes.

Esta acción, debe constituir una prioridad en los programas de salud, sobre todo en regiones, cuyas estadísticas son especialmente preocupantes como ocurre en el Norte de Chile.

Sin embargo no se puede excluir a las familias de los adolescentes que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad en el desarrollo del proceso de información.

SUGERENCIA: En caso de darse la discusión y votación separada de este artículo 15, se sugiere la abstención.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención.



César Quiroga Soria

Asesor Legislativo Externo

**PROPUESTA DE INTERVENCION PROYECTO DE LEY, EN TERCER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES PARA ESTABLECER SANCIONES A LA
DECODIFICACIÓN ILEGAL DE LOS SERVICIOS LIMITADOS DE TELEVISIÓN.**

(BOLETÍN N° 10.294-15).

De: César Quiroga Soria, abogado, Asesor Legislativo Externo.

A: José Miguel Insulza, Senador Región XV

Fecha: 9 de Octubre de 2018

Ref.: Proyecto de Ley que establece sanciones a la decodificación a los servicios limitados de televisión.

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, remito a Ud. el proyecto de intervención en relación al proyecto de ley de la referencia.

PROPUESTA DE INTERVENCION

El proyecto de ley aprobado por el Senado, incorporó en el artículo 36 E de la Ley General de Telecomunicaciones, la sanción con una multa de 1 a 100 unidades tributarias mensuales o, en caso de reincidencia, de 20 a 200 unidades tributarias mensuales a quien **INSTALE** dispositivos tangibles o intangibles destinados a la decodificación de señales de servicios limitados de televisión, adecuadamente protegida.

La Cámara de Diputados aprueba una modificación, en la cual se sustituye al sujeto pasivo de esta sanción, que, de esta forma, dejaría de ser el que instale los mencionados dispositivos y pasa a ser el que, *“con ánimo de lucro preste servicios de instalación”* de los dispositivos.

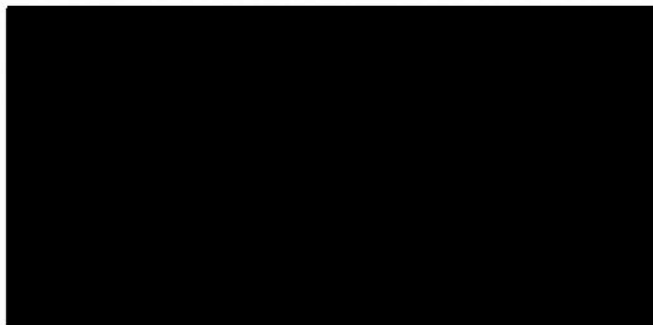
La modificación aprobada por la Cámara de Diputados debe ser rechazada, puesto que la sanción para quien preste servicios de instalación, ya se encuentra incorporada en el primer inciso del artículo 36 E propuesto, al sancionar, con multas muchos mayores al que sin la autorización del distribuidor legal, comercialice o distribuye los mencionados dispositivos.

De aprobarse la modificación realizada en la Cámara de Diputados, se tendría las siguientes consecuencias:

- a) Se dejaría sin sanción a quienes instalen este tipo de decodificadores, sabiendo o debiendo saber que su instalación constituye un hecho ilegal.
- b) Al aprobarse el texto de la Cámara de Diputados, tal como se está, se estaría permitiendo que quien presta los servicios de instalación, pueda acreditar, a los efectos de aminorar la sanción, que no persigue un beneficio económico con motivo de la infracción, su escasa capacidad económica y su conducta anterior.

Es evidente que, la orientación del proyecto, en relación a quienes realizan la instalación de los decodificadores, no estaba dirigido, a las empresas que realizan las instalaciones, desnaturalizándose la reforma legal propuesta.

SUGERENCIA: Por las razones antes expuestas, se sugiere el rechazo del proyecto.



PROYECTO DE INTERVENCION: PROYECTO QUE FORTALECE LA INTEGRIDAD PUBLICA

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo.

A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Fecha: 8 de Octubre de 2018

REF.: Minuta proyecto de intervención, fortalecimiento de la integridad pública.

De mi consideración:

El proyecto de ley que fortalece la integridad pública, tiende a evitar al nepotismo, como un elemento que enturbie los nombramientos de los servidores públicos y en ese sentido, la idea de legislar en esta materia, constituye un avance, en la probidad que debe rodear la conformación del aparato administrativo del Estado.

En este sentido, en el proyecto de ley, se otorga competencia al Director Nacional del Registro Civil para que, en caso de nombramiento o contratación en la Administración del Estado, del cónyuge, conviviente civil o pariente por consanguinidad, dentro del tercer grado por consanguinidad o dentro del segundo grado por afinidad, de algunas autoridades y representantes del Estado, pueda informar sobre los años de experiencia del candidato, sus años de experiencia calificada, sus conocimientos asociados así como sus antecedentes de integridad.

Este informe del Director Nacional del Registro Civil, de acuerdo al proyecto de ley, debe ser sometido, además, al conocimiento previo del Consejo de Alta Dirección Pública.

Tal como esta planteado, el proyecto, el requisito del informe previo de experiencia, competencia e integridad, es aplicable para cualquier contratación en la Administración del Estado, independientemente si esta tiene relación con

el servicio en el cual el cónyuge, conviviente civil o pariente por consanguinidad dentro del tercer grado por consanguinidad o dentro del segundo grado por afinidad se encuentre prestando sus servicios.

La norma propuesta es tan excesiva, que se estima impracticable.

Se establece un régimen de desigualdad entre las personas, que para estos efectos tienen *“la desgracia”* o *“la carga”* de ser parientes de ciertas y determinadas autoridades o servidores públicos del Estado, al tener que ser sometidos a criterios de calificación que no se aplican con carácter general.

De la misma forma, el establecer un tercer grado de parentesco implica que se aplica a sobrinos, nietos, tíos y abuelos lo que constituye un desincentivo para la función pública, creando una categoría de *“ciudadanos sospechosos”*, por el sólo hecho de tener un grado de parentesco, aun cuando no tengan una relación familiar que se traduzca en cercanía o dependencia económica, lo cual es injustificable.

Un elemento adicional es la incorporación a esta *“categoría sospechosa”* de los parientes por afinidad, involucrando a los cuñados por el sólo hecho de serlo, lo cual es realmente excesivo.

La modificación propuesta al artículo 55 bis señala que no podrán desempeñar funciones de Ministro, Subsecretario, Jefe Superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, las personas que hayan realizado Lobby ante ese organismo, dentro de los doce meses anteriores a su nombramiento.

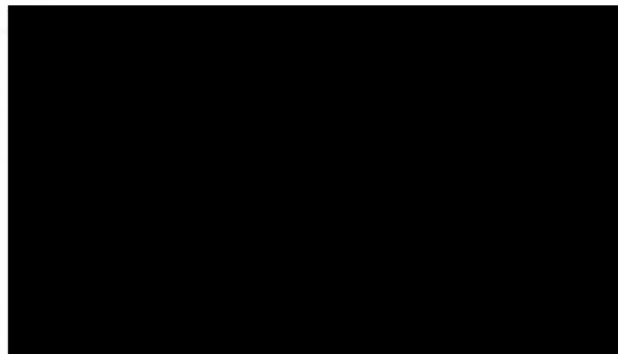
Esta prohibición contradice el texto expreso del artículo 32 de la Constitución Política del Estado, el que establece que es atribución especial del Presidente de la República *“Nombrar y remover A SU VOLUNTAD a los ministros de Estado, intendentes y gobernadores”*. La Constitución Política del Estado no coloca el límite del parentesco.

Los artículos 57 y 58 del proyecto, establecen prohibiciones que afectan a los funcionarios públicos *“sospechosos”* para desempeñar ciertas funciones, después de haber cesado en sus cargos, por periodos determinados de tiempo, señalándose que deben inhibirse de prestar servicios gratuitos y remunerados o

incluso de adquirir participación en entidades privadas que hayan estado sujetas a la fiscalización de entidades fiscalizadoras que se relacionen con el Presidente de la República, a través del respectivo Ministerio, generando un abanico tan amplio de inhabilidad que será incontrolable y sin establecer mecanismos de compensación, para quien tenga, dadas estas circunstancias, la muy mala idea de ser funcionario público.

Es más, los ex funcionarios, quedan con la obligación de informar al organismo al cual pertenecían, durante el periodo de doce meses de todas sus participaciones societarias, o de la prestación de servicios que desempeñe tanto en el sector público o privado, sean o no remuneradas, significando una carga para el ex funcionario público difícil de sobrellevar.

Por las razones expuestas se sugiere la abstención en este proyecto de ley.



**PROYECTO DE INTERVENCION: Reconocimiento del pueblo tribal
AFRODESCENDIENTES**

De: César Quiroga Soria, abogado, Asesor Legislativo Externo.

A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Fecha: 10 de Octubre de 2018

Ref.: Proyecto de ley de reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente.

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, pongo a su consideración, el proyecto de intervención relativo al reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente:

El proyecto de ley que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente de Chile, constituye la culminación de muchas décadas de lucha y avances en el justo reconocimiento de su cultura, historia y cosmovisión.

De acuerdo al Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística realizado en el año 2013, el cual tuve el honor de impulsar en mi condición de Intendente Regional se pudo establecer que un 4,7% de la población de la Región XV se autoidentifica como afrodescendiente, siendo especialmente relevante que un 52,4% de ellos, son jóvenes, menores de 29 años y un 87,96% habita en la ciudad de Arica.

Los afrodescendientes, de esta forma, tendrán un cauce legal para la visibilización de su identidad y difusión de su riqueza inmaterial, constituida por sus tradiciones, usos y costumbres.

La Región que represento ha impulsado unida, transversal y decididamente esta iniciativa legal, porque Arica y Parinacota fue el lugar de llegada, refugio y permanencia de los afrodescendientes de Chile.

Sus ancestros, sobrevivientes de un largo y tortuoso viaje desde el Africa, bajaron de los barcos de esclavos que llegaban al Puerto de Arica, llenos de

dolor y sufrimiento, siendo su destino principal la explotación inhumana hasta la muerte, de la cual eran víctimas en el Cerro Rico de Potosí.

Ante ese desolador panorama, los ancestros de los afrodescendientes chilenos, encontraron en los Oasis de la Región de Arica y Parinacota un lugar de escape, refugio y esperanza.

Es por ello que sus rostros, música, colores y tradiciones enriquecieron el paisaje ariqueño, en especial de sus valles, haciendo que nuestros habitantes, a lo largo de la historia, los consideren como una parte irremplazable de nuestra identidad, venciendo, tempranamente, las barreras de la discriminación.

Es tan arraigada, tan propia su presencia entre ariqueños y parinacotenses que ha sobrevivido a lo largo de los siglos y ha permitido que generaciones de jóvenes afrodescendientes y ariqueños inunden, periódicamente, nuestras calles de música y color.

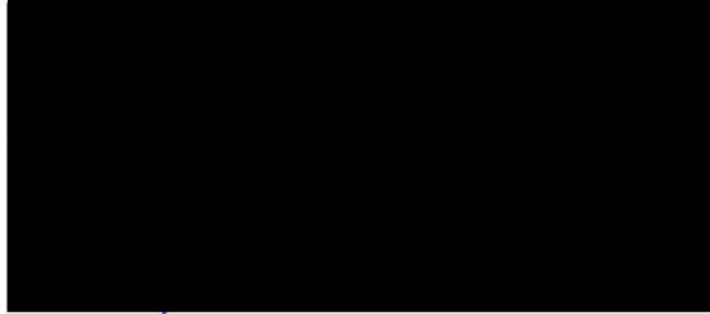
Su cosmovisión, nos trajo sabiduría, nadie puede conocer la idiosincrasia de la Región de Arica y Parinacota, de paz, integración y esperanza, si no conoce la diversidad de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes.

Toda la historia de los pueblos afrodescendientes debe ser enseñada en los colegios y universidades de todo Chile, dejarla en el olvido, implica renunciar a una parte de nuestro patrimonio cultural.

Muchos han contribuido a este histórico momento de su reconocimiento legal y hoy, que contamos con la presencia de varios de los percusores de este proyecto de Ley, rindo un sentido homenaje a ellos, a sus ancestros por su consecuencia y amor por sus orígenes.

La aprobación de esta ley, constituye, asimismo, un agradecimiento a su aporte e integración al crisol de nuestra nacionalidad.

Es por ello que, representando el mayor orgullo de ariqueños y parinacotenses, manifiesto mi aprobación a este proyecto de ley e invito a mis colegas Senadores a aprobar decididamente este acto de justicia histórica.



PROYECTO DE INTERVENCION: CONSEJO FISCAL AUTONOMO

De: César Quiroga Soria, Asesor Legislativo Externo

A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Fecha: 24 de Octubre de 2018

Materia: Proyecto de Ley Consejo Fiscal Autónomo.

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, pongo en su consideración, un proyecto de intervención, en relación al proyecto de ley de la referencia:

La creación del Consejo Fiscal Autónomo busca generar una instancia de análisis, evaluación y asesoría de las cuentas fiscales, creando una entidad destinada a salvaguardar la sanidad financiera del Estado, independientemente de los partidos políticos que ejerzan funciones de gobierno.

Debemos ser especialmente cuidadosos, con **la descripción del objeto** de la nueva entidad, **el procedimiento que se adopte para su conformación** y las **eventuales incompatibilidades** de quienes la conformen,

En cuanto a su **objeto**, el proyecto de ley establece, entre otros, el asesorar al Ministerio de Hacienda en materias fiscales que le sean encomendadas y el realizar informes, en relación a los estudios, análisis y otros temas que le competan, conforme a la ley.

Sin embargo, dentro de sus facultades se encuentra el contratar estudios y asesorías que se requieren para el cumplimiento de sus funciones, lo cual, aparece como un contrasentido, puesto que el Ministerio de Hacienda a quien el Consejo Fiscal Autónomo, integrado, de acuerdo al proyecto, por expertos de reconocido prestigio profesional o académico, en materias fiscales y presupuestarios, debe asesorar, terminará recibiendo los informes de consultores y asesores que el Consejo Consultivo a su vez contrate.

Esta buena iniciativa de contar con un Consejo Fiscal Autónomo, no debe derivar en la creación de una instancia burocrática.

Un tema distinto es que el Consejo pueda, de acuerdo al proyecto de ley presentado, celebrar convenios con Universidades y Corporaciones sin fines de lucro, lo que permitirá el pleno cumplimiento de sus funciones.

Por otra parte, **el procedimiento para su conformación**, establece que los integrantes del Consejo Consultivo serán designados por el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo, a través del Ministerio de Hacienda, previo acuerdo del Senado.

El proyecto de ley consigna que, para realizar el citado nombramiento, el Presidente de la República hará su proposición en un solo acto y el Senado se debería pronunciar sobre la propuesta presidencial como "unidad". Esto implica que el Senado deberá aprobar la proposición presidencial de los cinco miembros que lo componen en su conjunto y esto, no necesariamente es lo adecuado, puesto que basta que uno de los propuestos por el Presidente de la República no se considere del todo idóneo o no genere el consenso mayoritario del Senado de la República, para que se inviabilice el nombramiento de los cinco miembros que se proponen.

Por otra parte, se establece que la **duración de los miembros del Consejo**, en el ejercicio de sus cargos, será de cinco años, con lo cual, el periodo de sus funciones excederá al periodo presidencial en el cual fueron originalmente nombrados,

En este mismo sentido, la renovación de sus miembros a razón de uno por año, tal como se propone, implica que el Presidente de la República que ejerza sus funciones en forma inmediatamente posterior a su nombramiento y sus sucesores, contarán con un Consejo Fiscal autónomo, cuya mayoría de miembros siempre será nombrada en periodos presidenciales anteriores.

Por otra parte, el proyecto de ley establece que el Presidente de la República tendrá la **facultad de nombrar al Presidente del Consejo**, lo cual aparece como atentatorio contra la autonomía que el mencionado Consejo debe tener por definición.

Es absolutamente indispensable que la Presidencia del Consejo tenga plena autonomía en su actuación, puesto que corresponderá, a esta instancia, el

presentar las eventuales acusaciones, que se formulen en contra de los otros consejeros, por haber incurrir en conductas que se consideren faltas graves ante la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto de ley también establece que, **sus integrantes, no tendrán incompatibilidad con otras actividades profesionales o académicas**, lo cual no aparece como conveniente, en consideración a que el Consejo puede solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado, requiriendo información y documentos que estime necesarios para su examen.

Una verdadera independencia y autonomía en tan delicadas funciones que se encargan al Consejo Fiscal Autónomo, sólo se garantiza con dedicación exclusiva y la incompatibilidad con otras funciones profesionales, lo cual no es extensivo a las actividades académicas, las que no son excluyentes.

CONCLUSION Y SUGERENCIA: La creación del Consejo Fiscal autónomo constituye un avance en el orden presupuestario del Estado y como tal, en esta etapa, de discusión general del proyecto debe ser apoyado.

Sin embargo, es necesario puntualizar algunos aspectos contemplados en el proyecto de ley que pueden atentar contra su propia autonomía y operatividad, conforme lo señalado anteriormente.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria

Asesor Legislativo Externo



PROYECTO DE INTERVENCION: AULA SEGURA

De: César Quiroga Soria, abogado, Asesor legislativo externo.

A: José Miguel Durana Semir, Senador Región XV

Fecha: 23 de Octubre de 2018

Materia: Proyecto de Ley Aula Segura.

De mi consideración:

En relación al proyecto de ley de la referencia, pongo a su consideración el siguiente proyecto de intervención:

El proyecto de ley que hoy analizamos, deformado y desnaturalizado por las indicaciones aprobadas en la Comisión, constituye una irresponsabilidad frente a la violencia impresentable que la opinión pública ha podido constatar en algunos establecimientos educacionales y una verdadera falta de respeto respecto de los profesores y docentes de nuestro país.

No es posible que hechos tan graves como la utilización de explosivos y virulentas agresiones sean circunscritas en su tratamiento y sanción al ámbito de reglamentos disciplinarios o manuales de convivencia de cada establecimiento educacional.

Quien atenta contra la integridad de cualquiera de los miembros de la comunidad, amparado en un establecimiento educacional y en la presencia de menores de edad, se coloca, por sí mismo, al margen de todo ámbito educativo y debe ser separado inmediatamente de él, a través de su expulsión.

La sanción de la expulsión no sólo responde a la gravedad del hecho y al necesario castigo del agresor, sino que constituye una medida inmediata que busca salvaguardar a la comunidad educativa, la que no puede verse desintegrada en su esencia misma, dados los grados de violencia que se han producido y que han sido informados- .

Se aduce el respeto al debido proceso y la necesidad de salvaguardar, en todo momento, el futuro de los menores involucrados para oponerse a este proyecto de ley pero ello es una ficción.

Nadie pretende vulnerar derechos. Todo lo contrario, también forma parte de todo debido proceso, la necesaria protección de las víctimas así como el control del daño producido y ello, es especialmente delicado, cuando, lo que se daña, es la labor educativa, la comunidad escolar en su conjunto y ello se irradia en toda la sociedad.

Lo anterior, justifica la adopción de medidas extraordinarias y no pretender que quien ha decidido o es utilizado para atentar contra la labor educativa, pueda seguir concurriendo a los establecimientos educacionales.

Los bienes superiores que se persiguen, constituyen, en consecuencia, una debida limitación a la garantía del debido proceso.

Las indicaciones, aprobadas por la Comisión, constituyen un retroceso puesto que elimina la obligatoriedad de expulsión frente a hechos violentos y se reemplaza por la facultad de suspender. En ningún caso se dice que el Director del Colegio puede, dada la gravedad del hecho proceder a la expulsión inmediata.

Es decir, si un alumno dispara un arma contra un Carabinero, en el interior del establecimiento. El Director no lo podrá expulsar, sin antes advertirle a su apoderado, haber implementado un apoyo pedagógico y psicosocial del menor **y sólo en el caso de que se encuentre en un periodo escolar que permia su matrícula en otro establecimiento educacional.**

En definitiva, será muy difícil llegar a expulsión, medida de protección que beneficia a la comunidad escolar.

Asimismo, las indicaciones aprobadas por la Comisión, serán aplicables a los colegios particulares y esto, para estos establecimientos constituye un

retroceso, puesto que ya no podrán expulsar de inmediato a quienes, como se dijo deciden o son utilizados para realizar actos que los colocan al margen de la comunidad escolar.

Es por ello que se sugiere el rechazo de la totalidad de las indicaciones propuestas por la Comisión y la reposición de las indicaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.

Es todo cuanto puedo informar a Ud., para fines consiguientes,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

